

Respuestas a la crisis de la globalización neoliberal: intervención del Estado en la producción de aceite de palma en Chiapas, México^{1 2}

Héctor B. Fletes-Ocón

Universidad Autónoma de Chiapas

Alessandro Bonanno

Universidad Estatal Sam Houston, Estados Unidos

Recepción: 14 de mayo de 2015 Aceptación: 18 de noviembre de 2015

Resumen Empleando el estudio de caso del cultivo de la palma africana para la producción de aceite en Chiapas, México, este artículo analiza el tema de patrones de desarrollo alternativos a la globalización neoliberal. En particular, discute el problema del retorno de la intervención del Estado (neofordismo) como un instrumento para promover el desarrollo socioeconómico. Chiapas ha sido el escenario del movimiento zapatista de 1994. Como resultado de este levantamiento, y a pesar de su abierta postura neoliberal, el Estado mexicano intervino de manera significativa en Chiapas. En este contexto, se ha buscado el monocultivo de la palma africana como una estrategia para atender la pobreza local entre agricultores, generar formas alternativas y renovables de energía y proveer un esquema para el crecimiento socioeconómico en el área. Este artículo ilustra los resultados contradictorios de este proyecto “intervencionista” de desarrollo y las consecuencias y resistencias que conllevó. El análisis de este caso revela la naturaleza problemática de esquemas intervencionistas dirigidos por el Estado-nación en un contexto marcado por la crisis emergente del modelo neoliberal. Subraya también la relevancia de las iniciativas locales generadas por las aspiraciones y habilidades de los residentes locales.

¹ Traducción del artículo “Responses to the crisis of neoliberal globalization: state intervention in palm oil production in Chiapas, México”, publicado en *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, Vol. 20, N. 3, 2013. La investigación en que se basa este artículo fue financiada parcialmente por el FORDECYT (CONACYT) México, en el contexto del proyecto El papel de los pequeños productores en la agricultura y alimentación. La experiencia desde tres regiones agrícolas en México. Se actualizó a través de trabajo de campo del proyecto Competitividad agroindustrial y desarrollo territorial en el Pacífico Mexicano, financiado por PROMEP (PRODEF), SEP, México.

² Universidad Autónoma de Chiapas, correo electrónico: hctrfo@gmail.com, y Universidad Estatal Sam Houston, Estados Unidos, correo electrónico: SOC_AAB@shsu.edu, respectivamente

PALABRAS CLAVE: globalización neoliberal, neofordismo, palma africana, Chiapas, resistencias.

Abstract Employing the case study of the cultivation of African palms for the production of palm oil in Chiapas, Mexico, this paper probes the theme of alternative patterns of development to neoliberal globalization. In particular, it discusses the issue of the return to State intervention (neo-fordism) as an instrument to promote socio-economic development. Chiapas has been the theater of the Zapatista movement of 1994. As a result of that popular uprising and despite its overtly neoliberal posture, the Mexican state significantly intervened in Chiapas. In this context, the monoculture of the African palm has been pursued as a strategy to address local poverty among farmers, generate alternative and renewable forms of energy and provide a scheme for socio-economic growth in the area. This paper illustrates the contradictory results of this “interventionist” developmental project and the consequences and resistances that it entailed. The analysis of this case reveals the problematic nature of nation-state led interventionist schemes in a context marked by the emerging crisis of the neoliberal model. It also underscores the significance of local initiatives that are generated by the aspirations and abilities of local residents.

KEYWORDS: neoliberal globalization, neo-fordism, palm oil, Chiapas, resistances.

Introducción

En la década de los setenta, la crisis del régimen fordista (Bonanno, Busch, Friedland, Gouveia & Mingione, 1994; Habermas, 1975; O'Connor, 1974) acompañó la era de la globalización neoliberal (Harvey, 2005). En las últimas tres décadas, el neoliberalismo ha ofrecido el fundamento ideológico para la construcción de un capitalismo global creciente. El argumento de que la economía y la sociedad operan mejor cuando el mercado funciona de manera autónoma y libre de la intervención y regulación del Estado define nuestros tiempos. Caracterizado por un alto nivel de movilidad de capital, desregulación, expansión de redes transnacionales de producción y consumo, estándares globales privados y explotación acelerada de la mano de obra y los recursos naturales, la globalización neoliberal es la forma dominante del capitalismo contemporáneo (Bonanno & Cavalcanti, 2011; Harvey, 2010; Stiglitz, 2003). En años recientes, sin embargo, la crisis económica, política y social recurrente han permitido a muchos analistas argumentar que la globalización neoliberal ha experimentado una crisis de legitimación: el neoliberalismo no puede cumplir sus promesas a la sociedad y su dimensión de clase es de conocimiento público (*cf.* Duménil & Lévy, 2011; Helleiner, 2010; Lupel, 2005; Overbeek & Van Apeldoorn, 2012; Raulet, 2011). Argumentos simil-

ares se han vertido para la agricultura y los alimentos (Bonanno, 2012; Busch, 2011). La esencia de esta posición se puede resumir en tres puntos. Primero, la teoría del neoliberalismo se aleja por mucho de la realidad; hay demasiadas suposiciones injustificadas e interpretaciones inadecuadas acerca del funcionamiento de la sociedad para justificar la afirmación de que la realidad es reflejada exactamente por esta teoría. Segundo, los resultados del neoliberalismo favorecen de manera abrumadora a los grupos dominantes; la elite mundial, la llamada “uno por ciento” (Collins, 2012; Flank, 2011), se ha beneficiado enormemente del neoliberalismo, mientras que las clases media y baja y el pobre global han visto deterioradas sus condiciones socioeconómicas. Tercero, la aplicación de medidas neoliberales conduce a crisis económicas, sociales y medioambientales recurrentes. A menudo, las soluciones a estas crisis se han buscado no a través de medidas orientadas por el libre mercado sino de la intervención del Estado. Desde los problemas del sector financiero hasta desastres naturales, empleo y crecimiento económico, el mercado no ha sido capaz de resolver estas crisis. Al contrario, la intervención del Estado (por ejemplo, rescates financieros, limpias, programas de estímulos) se ha visto como deseable y se ha propuesto por todos lados, incluyendo corporaciones globales.

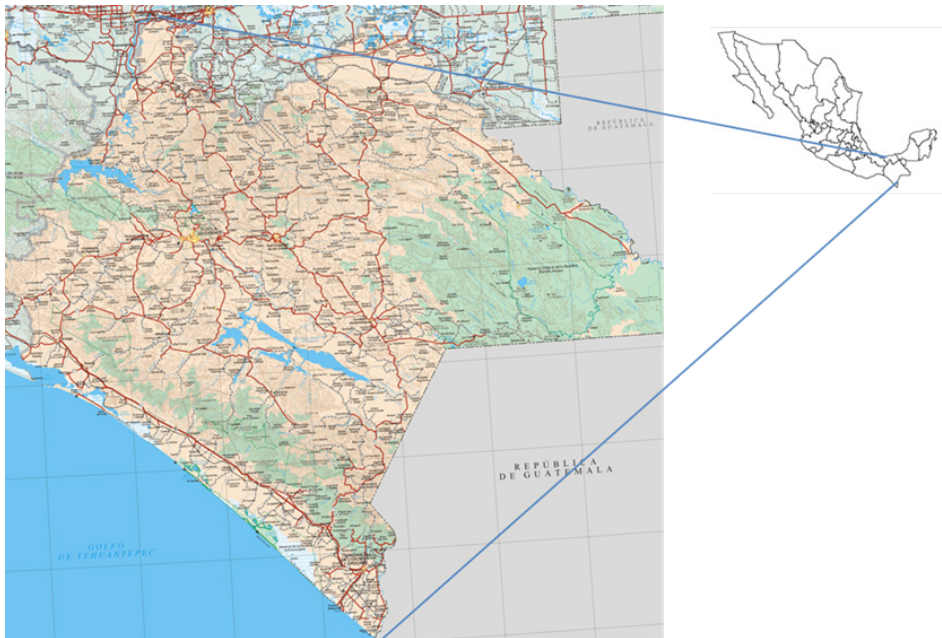
Es esta solicitud recurrente a la intervención del Estado lo que representa la columna vertebral de los argumentos acerca de la crisis de legitimación del neoliberalismo y el atractivo de estrategias de intervención del Estado neofordista. A pesar de los llamados por menor regulación originados desde la derecha intelectual y política (Cohen & DeLong, 2010; Greenwood, 2011; Bhagwati, 2004), la intervención del Estado ha emergido como la respuesta más comúnmente buscada y practicada a la crisis de los mecanismos neoliberales y de la globalización neoliberal misma. Resumiendo este sentimiento y elogiando las virtudes de la era fordista, el economista de izquierda laureado con el Premio Nobel, Paul Krugman (2012), argumenta que hoy la intervención del Estado estilo fordista puede generar tanto un crecimiento económico como una sociedad mucho más justa.³

La literatura sobre crisis de legitimación del neoliberalismo (cf. Helleiner, 2010; Lupel, 2005; Overbeek & Van Apeldoorn, 2012; Raulet, 2011; para el sector agroalimentario, Wolf & Bonanno, 2014) subraya que la búsqueda de soluciones a las varias crisis del neoliberalismo (*i.e.* financiera, económica, medioambiental, social y política) generó dos tipos principales de respuestas. El primer campo propone una mayor dosis de mecanismos de libre mercado (*e.g.*, Cohen & DeLong, 2010; Greenwood, 2011; Bhagwati, 2004). Se argumenta que el mercado se encuentra aún muy constreñido por la intervención y regulación del Estado. Así pues, las soluciones sugeridas son: mayor desregulación, reducir la intervención y medidas

³ De hecho, esta literatura no argumenta que la globalización neoliberal no es ya dominante. Simplemente enfatiza que sus varias y recientes crisis han sido atendidas a través de propuestas que implican la intervención del Estado.

de austeridad del Estado. El segundo campo (Krugman, 2012; Lupel, 2005; Raulet, 2011; véase Hudis, 2013, para una revisión de esta literatura) defiende que en el capitalismo maduro los mecanismos de mercado generan inestabilidad y crisis. De acuerdo con ello, lo que se requiere es una intervención fortalecida del Estado para enfrentar los problemas existentes. Ellos abogan por el fin de la política de austeridad y proponen un regreso de la intervención y las políticas del Estado estilo fordista (neofordismo). La mayoría de las posiciones de este campo no necesariamente se suscriben a la tesis de los “régimenes de acumulación”. En estas narrativas, más que como un régimen, el neoliberalismo es visto como un complejo de acciones y constructos ideológicos que es dominante en la sociedad pero que puede ser, y es, impugnado. No es necesariamente un sistema, pero representa aquellas formas más o menos organizadas a través de las cuales la clase dominante intenta mantener el poder. Son posibles acciones alternativas basadas en constructos ideológicos diferentes. El retorno a una intervención fortalecida del Estado en la economía y la sociedad, argumentan, es la solución deseable para los problemas actuales.

FIGURA 1. Chiapas, México



Fuente: Elaboración de los autores con base en información del INEGI.

En tanto estos argumentos neofordistas por el retorno a un Estado intervencionista caracterizan los debates sobre la evolución de la globalización neoliberal, sigue habiendo dudas acerca de la efectividad de una solución que ha encontrado límites y críticas significativas en el pasado (Habermas, 1975; O'Connor, 1974; Lipietz, 1992; Wolf & Bonanno, 2014). De acuerdo con ello, el objetivo de este documento es indagar la efectividad de los argumentos que desean proponer más intervención del Estado. Deseamos contribuir a las discusiones que buscan alternativas al neoliberalismo, pero también se consideran inquietudes acerca del uso de la intervención del Estado. Finalmente, nos gustaría ofrecer algunos elementos de interpretación acerca de la posibilidad de que ni los mecanismos de mercado ni la intervención del Estado podrían necesariamente ser soluciones apropiadas a los problemas de la sociedad actual.

Se indaga este tema a través del examen de las consecuencias de la reintroducción de las medidas estilo fordista como soluciones a la crisis actual del neoliberalismo. Más específicamente, este artículo ofrece algunos análisis acerca de las contradicciones generadas por la intervención del Estado en esquemas de desarrollo en la agricultura y el alimento en una región subdesarrollada del Sur. Estudia el caso de la implantación de la producción de palma de aceite en el estado de Chiapas, en México.

Este es un caso en el cual el Estado mexicano —de otro modo, neoliberal⁴— intervino para promover el cultivo de palma africana (*Elaeis guineensis*) para la producción de agrocombustible en Chiapas. Debido a las condiciones políticas, históricas y socioeconómicas que caracterizan a Chiapas, y sólo para el caso de esta entidad, el Estado mexicano ha mantenido una postura intervencionista que se asemeja a las estrategias fordistas de antaño por su doble objetivo de promover el desarrollo socioeconómico y mantener la legitimación social.⁵ Como se indica arriba, la pregunta de investigación que se discute en este trabajo se refiere a la deseabilidad y efectividad de un sistema social caracterizado por la intervención del

⁴ México ha sido el escenario de la introducción significativa de medidas neoliberales. Mientras la intervención del Estado en la agricultura no fue totalmente desmantelada, fue mucho más reducida que en Estados Unidos y Canadá. Estos son las contrapartes de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (véase Pechlaner & Otero, 2010). Mientras que algunos programas y agencias fueron reestructurados y permanecieron en su lugar (*i.e.*, el programa Procampo, Banrural cambió de nombre y fue reorganizado como Financiera Rural), muchos otros fueron eliminados. El punto de inflexión de esta reestructuración fue la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en 2001.

⁵ Alentar el crecimiento económico y legitimar los arreglos sociales existentes fueron los objetivos declarados del Estado fordista. En efecto, bajo el fordismo el éxito de cualquier Estado-nación era determinado por su habilidad para promover acumulación de capital y, simultáneamente, mantener legitimación social (Aglietta, 1979; Antonio & Bonanno, 2000; Carnoy, 1984; Lipietz, 1987, 1992).

Estado. Dado que la complejidad de este asunto impide que el artículo sea exhaustivo, este caso ofrece algunos elementos que podrían contribuir a la discusión de alternativas a la globalización neoliberal y nuevas formas de fordismo (Krugman, 2012; Bonanno, 2012).

Empleamos la metodología de estudio de caso. El caso se ha examinado a través de documentos existentes y datos cuantitativos, entrevistas con informantes clave y visitas al sitio. Se llevaron a cabo entrevistas en las áreas de producción de palma en las regiones Soconusco y Costa, que están entre las principales productoras de palma en Chiapas. Los datos se analizaron usando técnicas de *saturación* y *casos negativos*, por lo que las conclusiones fueron confrontadas con interpretaciones alternativas que no fueron seleccionadas. Esta postura permite la generalización de conclusiones (Berg, 2007; Bryant & Charmaz, 2007).

Este artículo se divide en cinco secciones. La primera analiza el contexto histórico del caso. Discute el fordismo, sus crisis y el desarrollo del neoliberalismo en el contexto de la globalización. La evolución de la agricultura en México bajo el neoliberalismo se discute en la segunda sección, junto con información específica del estado de Chiapas. La tercera sección ilustra el estudio de caso, documenta la expansión del cultivo de palma africana para la producción de aceite de palma y discute las contradicciones asociadas con este proceso. La dimensión contradictoria de la intervención del Estado se analiza en la siguiente sección. Finalmente, del estudio de caso se concluye que podrían ser deseables alternativas tanto al neoliberalismo como a las nuevas formas de intervención del Estado.

Fordismo y neoliberalismo

El escenario de esta investigación es el estado de Chiapas, en México, y el contexto es la globalización neoliberal (Crouch, 2011; Prasad, 2006). A inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, México empezó a introducir medidas neoliberales en el gobierno de su economía y sociedad (Merrill & Miró, 1996; Morton, 2003; Otero, 2004). Esto era parte del proceso internacional para resolver la crisis del fordismo (Aglietta, 1979, 1989; Harvey, 2005; Stiglitz, 2002; Bonanno & Constance, 2008). Durante la mayor parte del siglo xx, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, el fordismo fue el sistema de capitalismo organizado que coordinó la producción y el consumo en masa, generó una acumulación continua, fortaleció la legitimidad democrática, produjo crecimiento económico y abundancia sin paralelo, y forjó una cultura de consumo. En sociedades avanzadas, el “acuerdo capital-trabajo” dio a las empresas el control último sobre el proceso de trabajo y la producción, pero se le concedió al trabajo organizado el poder de negociar contratos colectivos que definían los salarios, beneficios y condiciones

de trabajo. En consecuencia, muchos trabajadores participaron sustancialmente en las ganancias de la productividad y disfrutaron el incremento de muchos beneficios. Participando activamente en política, los sindicatos ayudaron a configurar la hechura de políticas, planeación y legislación laboral. El Estado fordista empleó políticas keynesianas de controles fiscales avanzados, regulación socioeconómica más amplia, y el incremento de los beneficios en salud, educación y bienestar. La clase media creció enormemente, y mucha gente logró el paquete estándar de consumo y mejoró grandemente sus condiciones de vida. El fordismo de la posguerra fortaleció la inclusión de mucha gente antes marginada, elevó el salario social y aumentaron las oportunidades de igualdad de condición, especialmente en la democracia social. Sin embargo, el sistema general de clases siguió siendo complejo y fuertemente estratificado. El estrato más bajo se benefició poco y se mantuvieron agudas desigualdades entre razas dominantes y subordinadas, grupos étnicos y géneros, trabajadores de producción y profesionistas, trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, así como la distancia económica entre países desarrollados y naciones en desarrollo, lo cual puso de manifiesto los compromisos políticos y el patrón de burocratización de la era. Desigualdades de este tipo existieron en algún grado en todo el mundo. En el Norte avanzado, el fordismo fue particularmente criticado en la medida en que la intervención y mediación del Estado eran vistas como formas de opresión y dominación sobre las masas (Habermas, 1975; Marcuse, 1964; O'Connor, 1973; Offe, 1985). En el caso del Sur, el fordismo era visto como un sistema que ampliaba el control de los países centrales y sus corporaciones multinacionales sobre los países en desarrollo y su gente, incrementando así la dependencia y dominación económica y política (Frank, 1969).

Durante el periodo de más fuerza del fordismo este sistema recibió ataques desde todos los lados del espectro político por sus impactos alienantes, despolitizantes, regimentalistas y homogeneizantes. La derecha intelectual criticó fuertemente la naturaleza política del intervencionismo del Estado al mostrar sus distorsiones y una larga lista de consecuencias no deseadas. En el manifiesto clásico del neoliberalismo, *Capitalism and freedom*, Milton Friedman criticó directamente el fordismo en la agricultura enfocándose en los programas de apoyo a los precios de los productos agrícolas (1982 [1962], pp. 181-182). Introducidos para estabilizar estos precios y apoyar el ingreso de los agricultores —en particular de los que trabajaban pequeñas granjas familiares—, pero también para controlar el trabajo excedente, eran vistos como ejemplos de gasto dispendioso, burocratización e ineficiencia. Para Friedman, los programas de precios de soporte creaban excedentes no deseados, mantenían a los agricultores en la tierra a pesar de sus bajos ingresos y pobres expectativas de crecimiento económico, incrementaban los precios de los alimentos a los consumidores y, paradójicamente, discriminaban a los agricultores más pequeños, familiares, a los que supuestamente apoyarían. La intervención del Estado alteraba el

funcionamiento sin sesgos del mercado en favor de un sistema determinado por negociaciones políticas y compromisos que inevitablemente sufría la influencia de poderosos intereses especiales. En efecto, Friedman argumentó que la creación de programas agrícolas en Estados Unidos era resultado de la sobrerrepresentación de las áreas rurales en el sistema electoral y el Congreso (1982, p. 181).

Igualmente críticos de los programas de precios apoyo fueron autores que escribieron desde la izquierda (Buttel & Newby, 1980; Rodefeld, Flora, Voth, Fujimoto & Converse, 1978). Tanto la izquierda populista como la marxista atacaron los programas de precios soporte por su ineficacia e ineficiencia, desperdicios de recursos y, más importante, por distribuir fondos en una forma que discriminaba a los segmentos pobres de la sociedad. Estas críticas no se limitaron a Estados Unidos sino que se aplicaron también a otras partes del mundo, incluyendo la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea), Japón y Australia (Johnson, 1973; Mottura & Pugliese, 1980). Oponiéndose fuertemente a los pronunciamientos de los partidarios del neoliberalismo, la izquierda defendió formas más democráticas de intervención del Estado que traerían igualdad sustantiva, libertad y bienestar a la sociedad (Carnoy, 1984; Jessop, 1982; Offe, 1985).

En países menos desarrollados como México, los beneficios del fordismo fueron menos visibles. A pesar de sus políticas contradictorias, el Estado redistribuyó recursos, creó infraestructura necesaria y permitió a una buena parte de la numerosa clase campesina permanecer en la tierra (Hewitt, 1999 [1976]; Otero, 2004, 1999). Mientras que la desigualdad social y la inestabilidad permanecieron elevadas, y las elites urbanas incrementaron su poder y riqueza, los mecanismos de programas de precios de soporte, medidas de redistribución de tierra, inversión en infraestructura y titulaciones *de facto* contuvieron la migración de áreas rurales a urbanas y a Estados Unidos y garantizaron bajos pero sostenibles estándares de vida a los residentes rurales. En una medida significativa, la agricultura campesina fue respaldada y su desarrollo alentado (Hoffman, 2000; Weller, 1998). En México, las estrategias de sustitución de importaciones iniciadas en la década de los cincuenta aumentaron la producción industrial y la productividad, mientras que el tipo de cambio estable del peso promovió las exportaciones. El resultado fue una significativa expansión de la economía que, a finales de la década de los sesenta, permitió que México fuera grandemente autosuficiente en cultivos alimentarios y en la mayoría de bienes de consumo (Merril & Miro, 1996; Pechlaner & Otero, 2010). En la agricultura, la inversión en la creación de infraestructura expandió la tierra cultivada, mientras que los esfuerzos en extensión mejoraron la calidad y cantidad de la producción, incluyendo la generada por el campesinado. Sin duda, a pesar de estas mejoras, los problemas de pobreza y emigración permanecieron (Hewitt, 1999 [1976]; Merrill & Miro, 1996; Galanda, 1964; Otero, 2004).

A inicios de la década de los setenta, mercados internacionales más competi-

tivos, altos costos de los programas de bienestar social, la crisis del petróleo, resistencia social y otros problemas condujeron a la caída del fordismo. Defensores de la globalización neoliberal vieron el Estado fordista como la causa de las contracciones económicas y las patologías sociales relacionadas con ellas. La fuerza de la ideología neoliberal y las políticas de muchos gobiernos, encabezados por Estados Unidos y el Reino Unido, para debilitar el trabajo, atacar el Estado de bienestar, reducir la carga fiscal sobre la gente rica, desregular el sector privado y privatizar bienes del dominio público socavó el fordismo. Particularmente exitoso fue el diseño neoliberal para reemplazar la intervención del Estado políticamente dirigida, con fuerzas de mercado “neutrales” (Habermas, 1975). Friedman y teóricos de inclinación neoliberal argumentaron que la intervención del Estado es siempre influenciada por poderosos grupos de interés y raramente opera eficientemente y en beneficio de los grupos meta. Por el contrario, las fuerzas del mercado operan de manera independiente de los intereses particulares y tienden a premiar a los grupos y acciones meritorios. A través de las fuerzas de mercado, toda la gente recibirá lo que se merece (Friedman, 1982 [1962], pp. 180-185). La apelación de esta propuesta fue significativa en tanto que representaba una alternativa creíble a la ineficiencia insatisfactoria e ineficacia de la intervención del Estado y sus costos dispendiosos, gran burocracia y frecuentes abusos (Friedman, 1982).

El establecimiento de la globalización neoliberal marcó una era en la cual la aplicación de mecanismos de mercado, un Estado social reducido y la intensificada movilidad del capital caracteriza la economía y la sociedad. Igualmente importante es la subordinación de decisiones políticas a las fuerzas del mercado. La búsqueda de lucro en el mercado libre fue elevada como la condición fundamental de operación de la sociedad (Harvey, 2005, 2003). Esta *economización* de la política definía la globalización neoliberal (Bonanno & Cavalcanti, 2011).

Mientras se expandía la globalización neoliberal crecían las contradicciones y emergía la crisis económica, social y política. Las soluciones, sin embargo, se buscaban más con la intervención del Estado que de mecanismos de mercado (Helleiner, 2010; Pollard, 2012; Underhill & Zhang, 2008; Raulet, 2011). Mientras que los promotores de la globalización neoliberal clamaban por liberalización adicional de mercado y medidas de austeridad,⁶ la intervención del Estado se ha visto como la solución más efectiva. Desestimando argumentos conservadores y los inclinados

⁶ Las medidas de austeridad tuvieron como resultado estancamiento económico, altas tasas de desempleo, falta de inversiones productivas y el deterioro de los servicios públicos. Esta acción neoliberal generó la resistencia del público en general, que protestó por el menor bienestar socioeconómico y las perspectivas de futuro poco prometedoras. También creó oposición de los grupos corporativos que lamentaban la limitada asistencia del Estado y la falta de libertad adicional para las grandes compañías (Lapavitsas, 2012; Habermas, 2012).

a la izquierda en contra del fordismo, los neofordistas subrayaron la relevancia de la intervención del Estado en los ámbitos económico, social y político. En lo económico (véanse Krugman, 2012; Pollard, 2012), la importancia de políticas económicas keynesianas (gasto deficitario y regulación de mercado) fue enfatizada junto con la habilidad histórica de estas políticas para atender recesiones profundas. Políticamente (Raulet, 2011), denunciaron la postura neoliberal que iguala obtención de beneficio con decisiones políticas “buenas para todos”. Entendían que esta “economización de la política” limitaba la participación política de las clases medias y trabajadoras. Dando prioridad a procesos garantizados por la intervención del Estado, argumentaban que deberían lograrse mecanismos balanceados que promovieran el crecimiento económico pero también la estabilidad social. En lo social (Collins, Williams & Di Leonardo, 2008), la reestructuración del neoliberalismo de los mecanismos y programas de bienestar eliminaban grandemente su disponibilidad a, y efectividad para, las clases trabajadoras y medias. Se vio como necesario un retorno a la intervención del Estado en lo social y una condición fundamental para estimular la demanda, reavivar el crecimiento socioeconómico y generar relaciones sociales pacíficas y estables. A pesar de la relevancia de muchos de estos pronunciamientos, el hecho de que la intervención del Estado no ha sido tan efectiva como se esperaba en la solución de problemas ha traído al centro la cuestión de la deseabilidad de un regreso a medidas estilo fordista.

Contexto

México

En la agricultura de México, la implementación del neoliberalismo se centró en la eliminación progresiva de los programas de fomento del Estado y la apertura de mercados. El blanco fueron programas de soporte como los que respaldaban la agricultura campesina, la producción y el consumo local de alimentos y la redistribución de la tierra. La aceleración de este proceso en los noventa se simboliza por la reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana, que abolió *de facto* el sistema de ejidos en 1992, y la membresía de México en el TLCAN en 1994 (Cornelius & Myhre, 1998; Morton, 2003; Otero, 2004, 1999). El sistema de ejidos era una de las instituciones directamente derivadas de la Revolución Mexicana de 1910-1920. Entregó tierra pública⁷ a campesinos y pretendió que fuera un sistema en apoyo

⁷ El sistema de ejidos adoptó diversas maneras de distribuir la tierra entre los campesinos. Distribuyó tierra federal; restituyó tierra a comunidades y pequeños pueblos; expropió tierra privada y la redistribuyó entre campesinos. Bajo el sistema tradicional, los ejidatarios fueron autorizados a usar tierra

a la agricultura campesina. También facilitó la existencia de redes de producción local de alimentos que permitieron a los campesinos tener acceso a alimentos básicos. La reforma del sistema de ejido hizo que esta tierra esté disponible para uso comercial. Simultáneamente, el hecho de que el Estado mexicano diera apoyo a los trabajadores agrícolas promovió *de facto* la inmigración de ellos a Estados Unidos (Bartra, 2004). La firma del TLCAN en 1992 y su instrumentación en 1994 abrió la frontera mexicana a las exportaciones agrícolas estadounidenses y canadienses. Sin la protección de programas de gobierno, los agricultores locales no pudieron competir con productores del Norte, y las importaciones de México de alimentos básicos se incrementaron rápida y dramáticamente (González & Macías, 2007). Como resultado de ello, los productores mexicanos fueron forzados a especializarse en la exportación de productos de alto valor tales como frutas y hortalizas, y redujeron relativamente su producción de cultivos alimentarios básicos como el maíz.

Una consecuencia importante de este cambio fue el giro de la política fordista de “seguridad alimentaria” a la neoliberal de “oportunidades de mercado”. Bajo el fordismo, uno de los objetivos de la política agrícola doméstica fue generar producción adecuada para satisfacer las necesidades del país y las de la población pobre y trabajadora en áreas urbanas y rurales (Ramírez Silva, 1989). En este contexto, en las cuatro décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial la agricultura fue identificada como un sector estratégico que podía apoyar la expansión de áreas urbanas y los intereses de las clases dominantes, pero también controlar la fuerza de trabajo rural sobrante y entregar algunos beneficios a campesinos y pequeños productores (Bartra, 1974; Merrill & Miro, 1996; Ramírez Silva, 1989). El giro neoliberal a “oportunidades de mercado”, por el contrario, disoció metas sociales de objetivos económicos e hizo la búsqueda de beneficio dirigida por el mercado la dimensión esencial de la política agrícola nacional. Mientras que un puñado de productores se benefició de las medidas neoliberales y del crecimiento del mercado de exportación, la vasta mayoría de agricultores experimentó un deterioro en sus condiciones de vida, los campesinos perdieron mucho de su habilidad para producir alimento para autoconsumo y los consumidores urbanos de las clases baja y media resultaron perjudicados por los incrementos de precios de alimentos (González & Macías, 2007; Pechlaner & Otero, 2010). Hubo un empobrecimiento progresivo del campesinado mexicano y de los productores medianos y pequeños ya que los programas creados para mitigar la apertura del mercado fueron pobremente fundados e inadecuados para mejorar las estructuras de producción y productividad (Otero, 2004). De esta manera, las fuerzas del mercado y la competencia injusta del Norte —los programas de soporte a mercancías siguieron siendo mucho más

comunal y controlar sus productos.

fuerzas en Estados Unidos y Canadá (Pechlaner & Otero, 2010)— deprimieron las condiciones de vida en áreas rurales y se incrementó la emigración hacia el Norte (Bartra, 2004). Definida como “la importación de alimentos y la exportación de agricultores” (Bartra, 2004), la política agrícola neoliberal empeoró las condiciones de muchos segmentos de la sociedad mexicana (Pechlaner & Otero, 2010).

Chiapas: resistencia al neoliberalismo y al neofordismo

En el caso de Chiapas, el cuadro 1 indica la medida en que el uso de tierra dedicada a la producción para consumo nacional (principalmente maíz) se ha redirigido a la producción de cultivos industriales o de exportación. En este aspecto, el caso de Chiapas sigue el mismo patrón que el resto del país (Lechuga, 2006). Aun así la historia reciente y las condiciones generales de Chiapas son significativamente diferentes de las del resto de México. Localizada en el extremo sur del país, limítrofe con Guatemala, Chiapas es sinónimo de pobreza, marginación social y alta concentración de población indígena. Datos oficiales indican que alrededor de 32 % de la población chiapaneca se define como tal. Aunque la producción agrícola ha sido históricamente la principal actividad económica, en los últimos veinte años el tamaño promedio de las unidades de producción ha decrecido de 13 a 8.6 hectáreas y la proporción de unidades que ha permanecido activa en la agricultura también ha decrecido de 99.5 a 88.2 % (INEGI, 2007). Esto es resultado de un conjunto complejo de factores que incluyen la fragmentación de la propiedad por herencia (tierra dividida entre los miembros de la unidad de producción) y el uso de la tierra para actividades alternativas. En este contexto, se ha redirigido la producción a las frutas y hortalizas y a cultivos de uso industrial como la palma africana, caña de azúcar y mango, y menos a cultivos alimentarios para consumo local.

El 1 de enero de 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició una rebelión en contra del gobierno mexicano. Denunciaba la naturaleza explotadora de la globalización neoliberal y la demanda de “tierra, libertad y autodeterminación para la población indígena y los desposeídos” hacia eco en todo el mundo. Lo que se convirtió en un movimiento pacífico forzó al gobierno neoliberal a conceder una autonomía significativa a los residentes locales. Simultáneamente, inauguró una política de apoyo e intervención socioeconómica en Chiapas con los objetivos declarados de combatir la pobreza y promover el desarrollo. Sin embargo, la agenda real tenía el control social y la pacificación de la extensa opinión pública internacional prozapatista como sus objetivos no revelados.⁸ En esencia, el —de otra manera— Estado neoliberal mexicano iniciaba una

⁸ Hay una copiosa literatura sobre el movimiento y rebelión zapatista. Véanse Collier (2008), Harvey (1998), Ramor (2011) y Morton (2011).

estrategia de intervención estilo fordista para ejercer control social en Chiapas.

CUADRO 1. Chiapas. Tierra empleada en los principales cultivos, cambios 1993-2011 (ha)

Año	1993	2001	2008	2011
Maíz	744,926	938,908	699,921	711,199
Café	231,328	241,029	254,275	257,367
Frijol	97,520	126,353	118,471	118,391
Palma africana	3,823	16,793	19,290	38,525
Caña de azúcar	20,651	27,496	28,817	31,584
Mango	13,101	17,656	25,979	26,484
Plátano	22,599	23,845	25,007	24,355
Cacao	30,000	22,637	19,781	19,717
Sorgo	8,133	13,431	14,862	13,306
Soya	6,868	11,978	10,614	14,366
Ajonjolí	1,359	9,544	8,388	9,073
Sandía	1,707	1,267	2,363	1,779
Arroz	2,119	847	1,406	523
Carne de res	NA	2,531,102*	2,387,567	2,538,781
Carne porcina	NA	674,882*	780,429	772,644

*Se refieren a 2002.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México.

En este contexto, se concedió al estado de Chiapas un estatus especial *de facto*, y los temas de autonomía para la población indígena, crecimiento socioeconómico, resistencia a la exclusión social y oposición al neoliberalismo contantemente ocuparon un escenario central en la arena internacional. Esta situación se tradujo en una continua intervención económica del Estado mexicano en Chiapas, ya que sólo en 2011 el gobierno federal gastó el equivalente a 500 millones de dólares en programas para el estado. Entre estos programas financiados por el gobierno estaban las iniciativas de “desarrollo social” y la “lucha contra la desigualdad”. Este tipo de programas fordistas recibieron casi dos terceras partes de los fondos y significativamente más que otros proyectos más orientados al mercado, tales como Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fondos adicionales fueron aportados por programas internacionales que proporcionaron recursos al gobierno mexicano (Sabines, 2011). Es importante resaltar que estos programas se dirigieron principalmente a pequeñas unidades agrícolas porque la agricultura sigue siendo un componente fundamental de la economía local (Sabines, 2011).

El caso

La expansión de la producción de palma africana y la política de agrocombustibles

Uno de los programas iniciados por el Estado mexicano en Chiapas consistió en el apoyo al cultivo de palma africana. La racionalidad de esta intervención descansó principalmente en dos aspectos. Primero, el gobierno mexicano buscaba formas de legitimar sus acciones respecto a las pobres condiciones socioeconómicas de Chiapas y su inestabilidad política. En particular, el arraigado problema de pobreza en la región seguía siendo muy visible y requería intervención. Adicionalmente, la opinión pública nacional, pero sobre todo la internacional, describían las acciones del Estado mexicano como “autoritarias”. Eran necesarios y deseables programas que mitigaran esta imagen negativa (Morton, 2011; Ramor, 2011). Segundo, una ola de protestas contra la inestabilidad de, e incrementos en, los precios de maíz y la preocupación por el uso de cultivos alimentarios en la producción de etanol estimuló al gobierno mexicano a tratar de reducir el uso de combustible fósil mediante fuentes de energía renovables que no involucraran maíz y otros cultivos alimentarios. Debido a su desempeño agronómico,⁹ el cultivo de palma africana fue identificado como un insumo efectivo para producir agrocombustible (Pineda, 2009; Ramírez, 1991).

Fondos para el proyecto de palma africana vinieron también del gobierno local. Agentes oficiales, tanto federales como locales, definieron este proyecto como una oportunidad para estimular la economía local y crear crecimiento para la población local empobrecida, al tiempo que contribuía en los aspectos de energía y alimentos. Reducir la cantidad de cultivos alimentarios usados para la producción de energía se había convertido en una propuesta ampliamente apoyada. Esta racionalidad evocaba los planes fordistas dado que contemplaba la instrumentación de actividades productivas cuyos objetivos declarados eran el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y su estabilidad social. Estos objetivos contradecían políticas en favor de las “oportunidades de mercado” que habían definido las acciones del Estado mexicano desde los años noventa (Morton, 2011).

Sin duda, en este proyecto el gobierno federal adquirió un papel mucho más prominente que el gobierno local aun cuando éste implementó muchas de las medidas del proyecto. Siguiendo una tradición de autoridad centralizada y reducida autonomía local, se reproducía la postura jerárquica que caracteriza la interacción

⁹ La palma africana tiene un rendimiento anual de cerca de 5,000 kilogramos de aceite por hectárea (diez veces mayor que otras semillas de aceite, como la soya), lo cual se traduce en aproximadamente 6,000 litros de biodiesel (Pineda, 2009; Miccolis & Teixeira de Andrade, 2012).

estatal federal-local en México (Bartra, 2004; Morton, 2011). En este contexto, dependencias estatales de Chiapas actuaban de manera que se adaptaban a los requerimientos de los planes federales. Inquietudes acerca de sanciones que se imponían a menudo —tales como asignación de presupuestos reducidos o el corte de carreras políticas de oficiales locales— configuraron los movimientos de la burocracia local. Excepciones al control estricto de autoridades federales consistieron primeramente en situaciones en las que la movilización local (a través de una variedad de organizaciones sociales) apoyaba las acciones del gobierno local.

Originalmente cultivada en Guinea, en el occidente de África, la palma africana fue importada a América del Sur y Centroamérica en el siglo xx. Junto con México, otros seis países —Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Brasil y Guatemala— se han dedicado activamente a su producción. En Chiapas, la palma apareció en la década de los cincuenta (Pineda, 2009; Ramírez, 1991). Clima, humedad, altura y profundidad del suelo en el área resultaron un ecosistema perfecto para su desarrollo, y hoy el aceite de palma se ha convertido en uno de los productos más rentables para elaborar aceite vegetal. El aceite puede ser “crudo” o “kernel”. El crudo surge de la esterilización y trituración del fruto de palma. El aceite kernel se extrae de las pequeñas almendras que se encuentran en el centro de la fruta. Ambos tipos de aceites son ampliamente usados porque se emplean como ingredientes principales en la producción de más de 200 artículos y como componentes de alrededor de 900 más en una variedad de industrias, incluyendo alimentos, productos del hogar, la limpieza y los cosméticos (Pineda, 2009). En México, la producción de aceite de palma se distribuye en tres regiones del Sur y Sureste húmedo tropical. En el Sur, en el estado de Chiapas, la palma se produce en las regiones Soconusco, Costa y Selva. En el Golfo de México, la producción se concentra en los estados de Veracruz y Campeche. Chiapas es el mayor y más eficiente productor, con alrededor de 67 % de la tierra total cultivada, 81 % de la producción y el rendimiento más alto (17 toneladas por hectárea en 2010) (www.siap.sagarpa.gob.mx; López, 2007, p. 47).

En 1952, 30,000 semillas fueron importadas y plantadas en 200 hectáreas por una empresa de la región. El establecimiento de esta primera plantación comercial se acompañó de la construcción de la primera planta para la extracción del aceite. Después, esta empresa introdujo nuevas semillas de Costa de Marfil e incrementó la producción en 700 hectáreas (Ramírez, 1991, p. 5; Velasco, 2010). El crecimiento fue estable, pero permaneció relativamente limitado. Fue a mediados de la década de los setenta cuando la Comisión Nacional de Fruticultura (Conafrut) comenzó a promover su cultivo. Con este propósito, hasta 1982 Conafrut importó más de un millón de semillas de Indonesia, Costa de Marfil y Costa Rica, así como equipo con capacidad de procesamiento de dos toneladas de frutas por hora. En los siguientes años, las plantaciones se propagaron en la región y aparecieron palmas en buen

número de comunidades. Aun así, los problemas parecían superar a los beneficios. Problemas con el manejo del cultivo, pobres habilidades en el procesamiento de la fruta y limitada disponibilidad de fondos para financiar operaciones tenía la Secretaría de Agricultura como justificaciones para el pobre desempeño del cultivo. En efecto, el apoyo limitado en extensión y experiencia de cultivo les impedía a los agricultores lograr el resultado que deseaban.¹⁰

En la década de los noventa, la inestabilidad política y la protesta social generadas por la acción del movimiento zapatista, y en menor medida la búsqueda de fuentes alternativas de energía, crearon el ímpetu para la intervención del Estado. Un nuevo impulso para incrementar la producción de aceite de palma comenzó en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En ese tiempo, la demanda de aceite de palma ascendía a 130,000 toneladas, pero la producción nacional podía satisfacer sólo el 3 % de esta demanda. De acuerdo con esto, el gobierno federal propuso el cultivo de 2.5 millones de hectáreas adicionales. Entre los estados seleccionados para el proyecto, Chiapas ocupaba una posición central (Pineda, 2009). La intervención del Estado continuó en el nuevo siglo y la Secretaría de Desarrollo Rural de Chiapas, apoyada con fondos federales, estableció el Sistema Producto Palma de Aceite en 2004, instrumentado en la región Soconusco en 2006 con el nombre de Programa Palma de Aceite.

El gobierno del presidente Calderón (2006-2012) propuso una política más sofisticada que específicamente intentó legitimar las acciones del Estado, al tiempo que fomentaba procesos de acumulación de capital. Enfrentando la contradicción entre la producción de alimentos y el establecimiento de cultivos para fuentes alternativas de energía, el gobierno recomendó el cultivo de palma africana sólo en tierras marginales. “[Propongo]”, escribió Calderón, “la utilización de tierras marginales para obtener los insumos que permitan producir biocombustibles sin afectar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo cuidar la integridad del medio ambiente”. Pensando en esta estrategia se elaboraron dos programas: el Programa de Producción Sustentable de Insumos y el Programa de Introducción de Bioenergéticos (Calderón, 2008: 266-267). Siguiendo estas directrices, en Chiapas, la intervención del Estado en la agricultura fue conformada para ir “más allá de la producción” y desarrollar nuevas fuentes de energía para hacer frente a los retos de la sociedad y las necesidades de la población mexicana (Sabines, 2007, p. 219).

¹⁰ De acuerdo con el gobierno, “la falla se debía, entre otras cosas, al hecho de que los productores dependían del crédito para sus operaciones. Este crédito era parcial e inadecuado. Hubo errores en la fase de procesamiento, lo cual afectó la habilidad para crear plantas de procesamiento eficientes. Finalmente, hubo problemas con las estrategias de manejo del cultivo que no se establecieron claramente” (Velasco, 2010, p. 92).

En apoyo de esta estrategia, en febrero de 2008 se aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Su objetivo fue coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano. Siguiendo la aprobación de esta ley, en mayo de 2008, el gobierno federal introdujo la Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos, la cual plantea “propiciar y consolidar las cadenas de producción de insumos de biomasa y de producción de bioenergéticos que favorezcan la seguridad energética a través de la diversificación de fuentes de energía, generando e integrando sinergias y dando respaldo al desarrollo rural sustentable” (Calderón, 2008, p. 209). Posteriormente, el gobierno desarrolló el Programa Sustentable de Producción de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico. En este marco se colocó como meta sexenal establecer la producción de 300 mil hectáreas de palma africana, que iniciaría en 2009 con 70 mil hectáreas (Calderón, 2008, p. 209).

El gobierno de Calderón y el gobierno del estado vieron la promoción de agrocombustible (que ellos llamaron biocombustible) como parte del proceso general de intervención para la modernización de Chiapas y como una manera de atender los problemas sociales, ambientales y económicos. Una declaración oficial —acertadamente llamada “reconversión productiva” — describía este esfuerzo de manera acorde: “[Nuestro objetivo] es promover la sustitución de cultivos tradicionales, como el maíz de autoconsumo, y que afectan el medio ambiente [*sic*], por otros sustentables, y que potencializan el ingreso” (Gobierno de Chiapas, 2009, p. 1, en www.cocoso.chiapas.gob.mx). El gobierno del estado propuso el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario para el periodo 2007-2012. De acuerdo con este programa, se daba prioridad a la introducción de nuevos cultivos orientados a la producción de agrocombustibles dada la limitada disponibilidad de energía renovable en México. Además, un reporte del Instituto Mexicano del Petróleo subrayaba la oportunidad que representaba la diversidad futura del mercado de combustibles, tanto fósiles como renovables (Sabines, 2007, p. 218). Se argumentaba también que la introducción de nuevos cultivos para producir energía renovable generaría nueva investigación para producción de biocombustibles alternos de bajo o nulo impacto ambiental, como biodiesel, etanol, hidrógeno y metano. En 2007, el gobierno del estado aprobó el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas. En 2009 se habían establecido, tan sólo en la región Soconusco, tres viveros de palma que proveían plantas a los productores sin costo (Pineda, 2009).

De hecho, la dimensión neofordista de esta postura fue disminuida por medio de apelaciones a las condiciones del mercado. Caracterizado por un déficit en aceites vegetales y grasas, en 2012 México importó cerca del 85 % de su demanda de 400,000 toneladas de aceite de palma. El gobierno del estado de Chiapas calculaba que “sería necesario tener una superficie de producción de alrededor de 115,000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 18 tons por hectáreas, para obtener

2 millones de tons de fruta fresca, cubriendo así el requerimiento nacional total” (IRBIO, 2011). Con ese fin, el estado de Chiapas planeaba plantar palma en 100 mil hectáreas durante los seis años del periodo 2007-2012. Se esperaba tener 68 mil hectáreas en 2011 (IRBIO, 2011). Argumentando que la producción de agrocombustibles debería “suministrar una mayor cantidad de biodiesel para el transporte público”, el estado construyó tres plantas procesadoras en Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Puerto Madero. Mientras que el precio del aceite de palma permaneció alto y siguiendo el desacoplamiento de la producción agrícola de la producción de alimentos, numerosos actores políticos y empresariales decidieron proseguir el cultivo de palma africana en lugar de cultivos alimentarios. De hecho, la tierra dedicada a la producción de palma se incrementó en 19 mil hectáreas de 2008 a 2011.

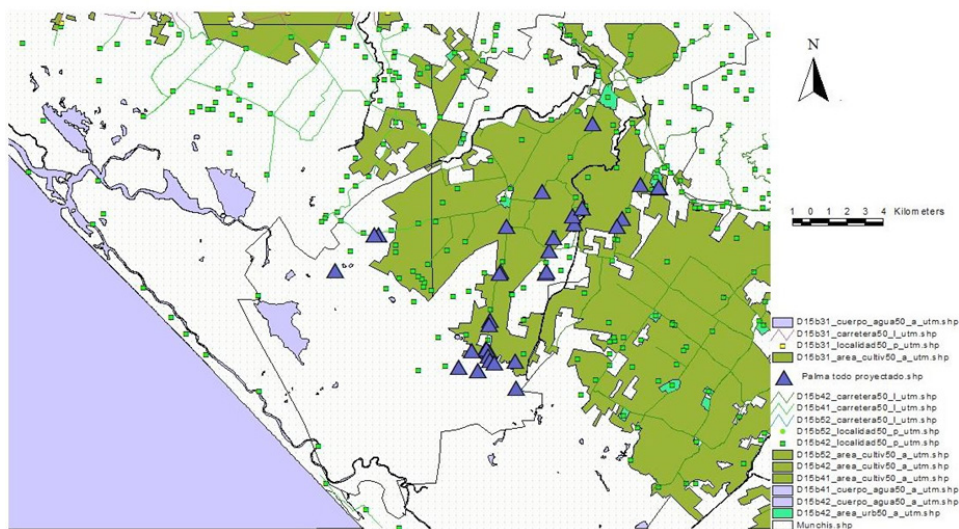
Pronunciamientos acerca de la efectividad, la extensión y los beneficios de la intervención del Estado contradecían los resultados de este proceso. En las primeras etapas del programa, el Estado proporcionó apoyo a los productores a través de una variedad de programas, incluyendo el establecimiento de campos de cultivo, limpieza y fertilización, así como pagos directos. Después, la mayoría de estos programas fueron suspendidos debido a problemas fiscales del Estado. En años recientes, el apoyo se había limitado a la entrega de plántulas y apoyos menores para el primer año de operación, e incluso se habían retirado tales programas. Adicionalmente, a pesar de los discursos del Estado acerca del uso del aceite de palma para producción de agrocombustibles, en realidad se ha empleado para otros usos industriales. La falta de infraestructura y de un sistema de distribución efectivo y los costos de producción más altos que los del combustible fósil han impedido la expansión del agrocombustible en México. De acuerdo con esto, la intervención del Estado sigue estando caracterizada por problemas fiscales, mientras que sus pronunciamientos presentan una imagen diferente del desarrollo real de la región. Se puede argumentar, entonces, que la intervención del Estado no sólo es limitada por problemas fiscales, sino que los intentos por legitimarla chocan con una realidad abiertamente diferente.

Cabe señalar que los agricultores respondieron a estos programas de gobierno con el incremento de su participación en el cultivo de palma africana. Entrevistas con productores locales indicaron que ellos percibieron una ventaja en producir palmas primeramente por las condiciones del mercado. El hecho de que el Estado suministrara plantas de manera gratuita se consideró importante, aunque secundario. Estos dos factores, argumentaron los agricultores locales, crearon un incentivo significativo para iniciar la implantación del monocultivo. Apuntaron, sin embargo, que la transición de alimento a la producción industrial no estaría exenta de problemas.

Primero, debido a los altos precios, los agricultores plantaron palma en tierra de primera calidad. La plantación de palma en tierra que tradicionalmente se ha empleado en la producción de maíz, plátano macho (una variedad local de pláta-

no), hortalizas, frutas para exportación (como mango) y pastura es ahora común en Chiapas (Fletes, 2013; figura 2). También, han aparecido palmas en tierras de áreas protegidas. Por ejemplo, aparecen en una sección de 7,000 hectáreas de la Selva Lacandona (sureste de Chiapas), zona protegida que debería poner límites a cualquier cultivo comercial, y en La Encrucijada (Soconusco), una reserva de la biosfera. Adicionalmente, el hecho de que las parcelas de alrededor también son plantadas disminuye la biodiversidad del ecosistema y lo hace más vulnerable a enfermedades y plagas (Fletes, Rangel & Ocampo, 2010).

FIGURA 2. Plantaciones de palma africana en áreas de cultivos básicos, frutas y Reserva de la Biosfera La Encrucijada

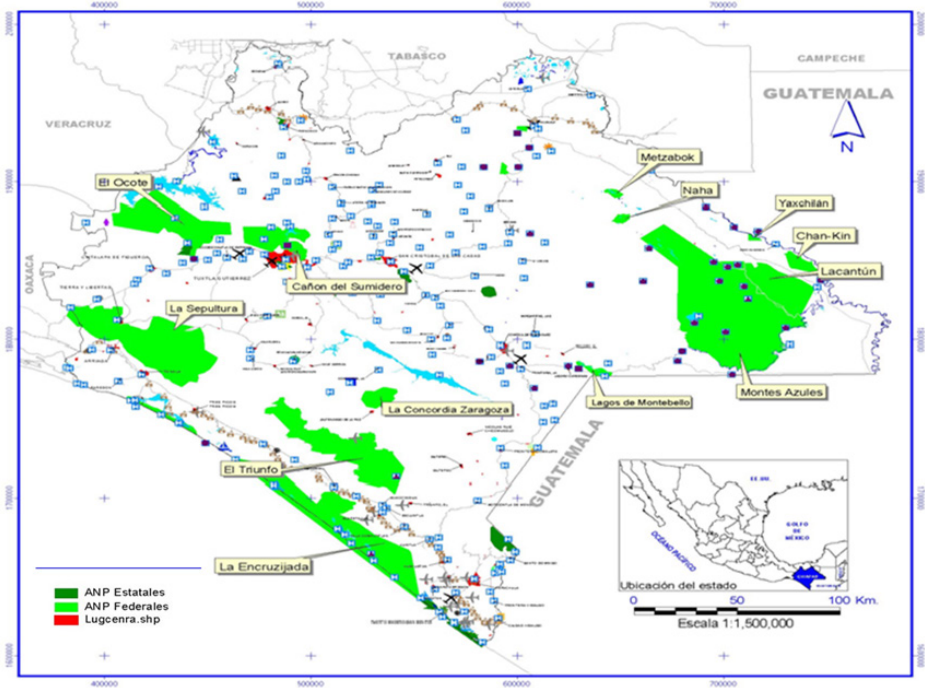


Fuente: Elaboración de los autores con registro de puntos GPS.

Segundo, como ya se mencionó, los agricultores experimentan dificultades económicas durante los tres años necesarios para tener la primera cosecha. Anteriormente, el Estado otorgó pagos monetarios para la reconversión productiva. Cuando este programa terminó y los problemas económicos se hicieron más difíciles de manejar, los agricultores comenzaron a plantar cultivos alimentarios junto a las palmas, comprometiendo así la eficiencia de ambos tipos de cultivos.¹¹

¹¹ Los agricultores indican que la sombra creada por las palmas crecidas limita el crecimiento de otros cultivos. Adicionalmente, reportaron que las prácticas de cultivo de la palma son a menudo incom-

FIGURA 3. Áreas naturales protegidas en Chiapas



Fuente: ECOSUR. LAIGE.

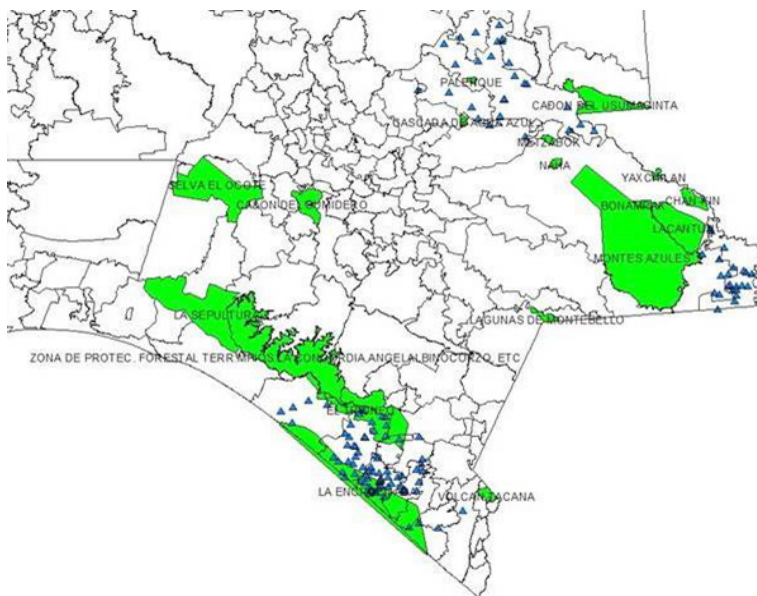
Tercero, debido a que se dedica más tierra a cultivos industriales, se envían menos cultivos alimentarios a los mercados y hay menos alimento disponible para autoconsumo. De acuerdo con estimaciones de una encuesta local (Fletes, Macías & Madera, 2014), cerca del 20 % de la producción de alimentos local fue reemplazada por palma. Adicionalmente, entrevistas con agricultores locales refieren historias de sustitución de producción de cultivos alimentarios por producción de palma. Un agricultor afirma: “... Yo planto sólo palmas... No creo que plantar otros cultivos sea eficiente... Antes producía arroz, maíz y plátanos en grandes cantidades, pero ahora sólo produzco palma”. Otro agricultor dice: “Tenía ganado, pero también mango y maíz. Pero ahora todo es palma...”. En un contexto en el cual la disponibilidad de cultivos alimentarios es ya insuficiente, el crecimiento de la producción de palma se ha acompañado de la importación de alimentos de los

patibles con las necesidades de otros cultivos.

mercados nacional e internacional. De igual manera, los alimentos están cada vez más disponibles a través de transacciones formales de mercado y están menos disponibles para quienes tienen medios limitados. Mientras que unos agricultores han sido capaces de incrementar su flujo de efectivo, otros sufren las consecuencias de la formalización del consumo de alimentos.

Esta situación ha afectado la soberanía alimentaria de los habitantes locales. Finalmente, la inestabilidad del mercado de aceite hace que los productores (particularmente los muchos pequeños agricultores de las regiones) sean vulnerables a la disminución de precios. Virtualmente sin alternativas al monocultivo y con la limitada capacidad del Estado para apoyarlos, las caídas de precios tienen serias consecuencias para la economía y las comunidades locales.

FIGURA 4. Sitios de producción de palma africana y áreas naturales protegidas federales en Chiapas



Fuente: Elaboración de los autores con información de la CONAMP, 2013 (<http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/informacion/info.htm>) y el SIAP. Cada triángulo indica 300 hectáreas de siembra de palma.

Plantas de procesamiento y agricultores

En la mayor parte de la década de los noventa, la presencia limitada de plantas de procesamiento o extractoras impedía a los agricultores incrementar la participa-

ción en programas para expandir la producción de palma. En el Soconusco en ese tiempo sólo dos plantas estaban en operación. Dada la capacidad de procesamiento relativamente limitada y la oferta creciente, los agricultores no podían vender su producción y eran a menudo forzados a dejar el cultivo. Esta situación cambió parcialmente en los años subsiguientes, y en 2012 había siete plantas procesadoras localizadas en el estado. Esto fue resultado de planes del Estado para facilitar la expansión de la capacidad de procesamiento en el área y las acciones de compañías procesadoras nacionales e internacionales. Esta estrategia no fue diseñada sólo para mejorar la producción sino también para atender las preocupaciones de los agricultores y limitar la discrepancia entre la producción relativamente alta y la capacidad limitada de procesamiento. En general, estos cambios permitieron a los agricultores afirmar que hoy la palma africana es el mejor cultivo en la región en términos de la ganancia económica que genera.

El entusiasmo de los agricultores locales acerca del aspecto económico de la implantación de este cultivo se asocia también con la cantidad y el sistema de pago. El precio del crudo se fija en el mercado internacional, el cual es dirigido por el productor más grande del mundo, Malasia. Hubo un incremento en el precio en el año 2007, cuando alcanzó cerca de 750 dólares por tonelada. Durante los siguientes dos años, el precio declinó, pero después se elevó de manera sostenida. En 2011 el aceite crudo se vendió en cerca de 1,100 dólares por tonelada. El precio pagado a los productores es establecido por la *extractora*. Se publica en la planta y se actualiza periódicamente, lo que permite a los productores saber exactamente cuánto recibirán por su cultivo. El precio local pagado en 2012 fue de alrededor de 130 dólares por tonelada. Los precios también cambian de acuerdo con el punto de entrega. La entrega directa de la fruta en las plantas procesadoras —o *recibas*— corresponde a precios más altos que los pagados en las plantaciones. Recibas distantes pagan precios menores.

A los agricultores también les gusta el sistema de pago. Ellos reciben un cheque cuando entregan la fruta a las instalaciones de recepción. Estos cheques son altamente apreciados porque se pueden cambiar por efectivo inmediatamente y, dada su popularidad, circulan como moneda informal. Debido a que las frutas pueden cosecharse cada quince días y se conoce el precio con anticipación, este sistema de pago rápido y su transparencia representa una diferencia significativa con las prácticas existentes. Con cultivos como frutas, verduras y granos los precios se establecen a través de un complejo sistema corrido por intermediarios y con frecuencia son desconocidos por los agricultores. A pesar de que las plantas procesadoras determinan el precio por pagar, los agricultores sienten que tienen más control de su negocio en la producción de palma que en otros cultivos.

Esta visión muy positiva del crecimiento del cultivo de palma africana es acompañada, sin embargo, de problemas para los agricultores, quienes ven a los que

manejan/poseen las plantas procesadoras como actores que tienen poder significativo sobre ellos. Cuando las plantas procesadoras necesitan materia prima para operar, la habilidad de los gerentes de las plantas para escoger entre un número relativamente grande de productores los dota de un poder asimétrico sobre los agricultores. En efecto, los gerentes de extractoras no sólo establecen los precios reales de compra, sino que deciden con quién hacer negocio. Los agricultores que no son del agrado de gerentes se arriesgan a no poder vender sus cultivos. Además, sienten que la experiencia de los líderes de las plantas de procesamiento y su conocimiento del sector los pone en desventaja. Esta asimetría de poder se identifica como una fuente de incertidumbre para los agricultores. Adicionalmente, intentos de establecer acuerdos con las extractoras en la década de los dos mil tuvieron como resultado mayor desconfianza de los agricultores. En consecuencia, las plantas procesadoras son vistas como entidades que se quieren provechar de los agricultores. A menudo éstos han solicitado el apoyo del sector oficial para solucionar este problema. Sin embargo, no hubo intervención del Estado en esta controversia ni ninguna mediación entre las partes, y el gobierno del estado no ha sido capaz de mitigar la desconfianza que los agricultores albergan hacia las extractoras.

La insatisfacción con el poder de las extractoras se ha traducido en resistencia. En particular, los agricultores decidieron trazar planes para poseer una extractora. En 1999, un número de pequeños productores unieron fuerzas para formar una asociación que incluía 300 miembros y cerca de 2,500 hectáreas de tierra. En los años siguientes, la difícil relación entre agricultores y extractoras confirmó la creencia de los agricultores respecto a los beneficios de poseer una planta procesadora. A pesar de sus buenas intenciones, diversos obstáculos se interpusieron en su camino, incluyendo la falta de recursos financieros y de personal técnico y gerencial. El punto de inflexión ocurrió en 2009, cuando la sociedad pudo reclutar un ingeniero local con antecedentes en el sector y experiencia de trabajo en Estados Unidos. Bajo el liderazgo de este individuo y de un productor local, la sociedad pudo reunir y entrenar un número suficiente de trabajadores para proveer de personal a la planta. Adicionalmente, la asociación pudo negociar el uso de una instalación vieja construida en los años setenta. La negociación fue particularmente exitosa y generó condiciones favorables tales como su renta gratuita. Esta planta se hizo totalmente operativa en 2009. Ayudado por programas financiados por el Estado (tales como Trópico Húmedo), la demanda creciente de aceite crudo, un manejo efectivo y apoyo de los agricultores y de la comunidad, este grupo pudo generar suficiente crédito y capital para construir una nueva planta, cuya construcción inició en 2011 y terminó en abril de 2012. Las extractoras de propiedad privada respondieron estableciendo programas de apoyo para productores tales como aquellos para la recolección directa de frutas cosechadas en el campo, venta de insumos a precios de descuento y asistencia técnica. A pesar de este apoyo, el volumen de frutas disponible para las plantas procesadoras

disminuyó debido al éxito de la planta de los productores.

Discusión

Hay un conjunto de problemas que hacen ineficaz e ineficiente la intervención del Estado en la producción de palma africana en Chiapas. En el *nivel económico*, este cultivo tuvo el resultado positivo de ganancias mayores para los agricultores. A pesar de estar expuestos a las fluctuaciones de precios del mercado global, le dieron la bienvenida al sistema de pagos directos y a la práctica de ser pagados frecuentemente. Aun así, y a pesar de los planes oficiales, la producción de palma desplazó cultivos alimentarios en tierra de primera, lo que causó que se enviaran menos alimentos a los mercados locales para el consumo. Debido a que el consumo local de alimentos se conectó cada vez más con cadenas externas de abastecimiento de alimentos, tanto los agricultores como los habitantes locales estuvieron cada vez más expuestos a las fluctuaciones de precios, dependieron de la disponibilidad de efectivo para adquirir alimentos y experimentaron una reducción en su soberanía alimentaria. Finalmente, la intervención del Estado, en lugar de disminuir la dependencia de los agricultores y habitantes locales de los mercados globales, la incrementó. La acción del Estado no fue capaz de reconciliar las crecientes oportunidades económicas para los agricultores con la estabilidad socioeconómica general y el bienestar de la comunidad local.

En el nivel de la producción de *energía alternativa en tierra marginal*, la intervención del Estado creó un sistema significativamente diferente de los planes originales, que contemplaban la producción de energía alternativa, renovable, en tierra que no se pudiera emplear para la producción de alimentos. Su deseabilidad se justificó a través de afirmaciones de que eran benéficos para los agricultores, la sociedad y la conservación del ambiente. En realidad, el aceite de palma africana producido en Chiapas nunca se empleó en el sector de energía. Se ha empleado exclusivamente como aditivo de alimentos e insumo industrial. Nunca se materializaron los planes gubernamentales de producción de energía alternativa. Como en otros ejemplos de producción de agrocombustible, el impacto medioambiental negativo contradice sus beneficios económicos asumidos. La emisión de bióxido de carbono (CO_2) de la producción de aceite de palma es más alta que la generada por la producción de combustibles fósiles (Holt-Giménez & Kenfield, 2009; Jonasse, 2009; Castañeda, González & Massieu, 2011). Se ha calculado que la emisión de carbono en la producción de aceite de palma es diez veces más grande que la generada en la producción de petróleo (Manrique, 2010, p. 128). De acuerdo con esto, la intervención del Estado promovió una forma de energía que es renovable, pero que no ambiental ni económicamente sólida. El argumento de que el aumento en la producción de

palma sería en tierra marginal nunca se concretó. El Estado no pudo controlar su cultivo en tierra de primera y en áreas naturales protegidas. Estas consecuencias ambientales negativas se agregan a los problemas asociados con la disponibilidad de alimentos para los habitantes pobres de las regiones indicadas arriba.

En el nivel *organizacional* y el de *planeación*, los planes del Estado para la reconversión de cultivos fueron ineficientes. A pesar de las metas para crear programas de pago para apoyar el ingreso de los agricultores durante la reconversión, la crisis fiscal del Estado impidió proporcionar asistencia técnica y económica adecuada a los productores. Mientras el Estado facilitó la construcción de plantas y apoyó la estrategia de reducir el poder asimétrico entre extractoras y agricultores, el control que los gerentes y propietarios de plantas ejercían sobre los agricultores siguió siendo fuerte. Los agricultores respondieron estableciendo su propia planta procesadora. Cuando la confrontación continuó, el Estado fue incapaz de mediar entre las partes.

Conclusiones

La investigación presentada en este artículo habla directamente del tema de la deseabilidad de la intervención del Estado en un contexto (México) dominado por una ideología y prácticas neoliberales y en una región, Chiapas, caracterizada por el subdesarrollo económico y malestar social. El caso de la producción de palma africana en la entidad representa un ejemplo de la intervención del Estado con una variedad de objetivos económicos y sociales. En lo económico, intentaba mejorar las condiciones de los productores locales y producir agrocombustible como una fuente alternativa de energía. La protección del medio ambiente y la construcción de formas sustentables de producción de energía estaban entre los objetivos clave del Estado. Similar importancia tuvo la preocupación del Estado por su legitimación social. Chiapas ha sido el escenario de fuertes protestas contra el Estado mexicano, que tuvieron apoyo y visibilidad internacional. La intervención del Estado fue diseñada para controlar la resistencia y apaciguar a la población local. El proyecto de palma africana era parte de un plan de intervención del Estado para alcanzar ciertos objetivos económicos, sociales, medioambientales y políticos.

Las numerosas contradicciones que caracterizaron la intervención del Estado en Chiapas apoyan la afirmación de la ineficacia e ineficiencia que avivó la crítica neoliberal del fordismo y su influencia ideológica y política en las cuatro últimas décadas. A pesar de los planes explícitos de promover la expansión económica, mejorar la estabilidad social, crear fuentes alternativas y renovables de energía y proteger el medio ambiente, los resultados no fueron acordes a estos objetivos. Siguiendo la crítica de la izquierda, la intervención del Estado mantuvo su naturaleza de clase y no logró ganancias sustantivas. Mientras mejoró el ingreso de los agricul-

tores, la exposición general de éstos y los residentes locales a las consecuencias no deseadas de las fuerzas del mercado se incrementó. En forma similar, la soberanía alimentaria decreció porque hubo menos alimento accesible en mercados locales y su disponibilidad se vinculó crecientemente a los mecanismos del mercado formal y a los actores corporativos que los controlan. La intervención del Estado ayudó a subordinar la vida de los residentes locales a fuerzas globales y fomentó su desanclaje del contexto local.

Estas contradicciones arrojan dudas sobre la deseabilidad de la intervención del Estado en un contexto definido por la crisis de la globalización neoliberal. Mientras que la legitimidad de ésta parece haberse agotado, el retorno de la intervención del Estado también parece problemática. El Estado, en sus niveles nacional y local, parece mal equipado para enfrentar retos económicos, ambientales y de desarrollo en un contexto en el que las relaciones sociales están cada vez más formadas por actores y procesos distantes. Mientras que la importancia de la acción del Estado no puede ni debería desestimarse, la evidencia de este caso sugiere que deberían considerarse, y eventualmente promoverse, opciones alternativas si se buscan formas democráticas de desarrollo y crecimiento socioeconómico. En particular, el estudio del caso de Chiapas revela la significación de las iniciativas locales estimuladas por las aspiraciones y habilidades de los residentes locales. Dos ejemplos deberían recordarse en este aspecto: el establecimiento de una planta procesadora propiedad de productores y la manera en la cual los agricultores manejaron la transición de cultivos alimentarios al monocultivo de palma.

El establecimiento de una planta procesadora propiedad de agricultores es un ejemplo de la habilidad de éstos y de residentes locales para movilizar recursos disponibles, crear nuevas y efectivas formas de organización y proponer planes generados localmente para el desarrollo socioeconómico. Los beneficios adicionales de esta iniciativa de empoderamiento son muchos e incluyen la generación de valor agregado que se queda en el área, la armonización de aspectos clave del proceso de producción, control por parte de los agricultores del proceso de producción, la reducción de las diferencias de poder entre agricultores y la industria procesadora y el fortalecimiento de los vínculos sociales y de la solidaridad local. La manera en la cual los agricultores manejaron la transición del monocultivo de palma es reveladora de la habilidad de los residentes locales para generar soluciones a los problemas emergentes. Simultáneamente, es también un indicador de los límites que las iniciativas locales podrían encontrar en ausencia de instituciones autónomas de coordinación y planeación. Este es particularmente el caso en un contexto caracterizado por una fuerte acción centralizada del Estado. Mientras que fue relevante para los agricultores continuar la producción de alimentos en tierra dedicada a la producción de palma, la coexistencia de los dos cultivos no fue ni productivamente eficiente ni ambientalmente sustentable. Parece, entonces, que la presencia de insti-

tuciones locales que coordinarían estas actividades y permitirían una participación más directa de todos los actores interesados podría representar un giro benéfico.

Siguiendo las indicaciones del estudio de caso, y en tanto se despliega el debate sobre la crisis del neoliberalismo y los límites de una posible aplicación de un modelo de neofordismo, la atención a las iniciativas de los actores locales y su empoderamiento, pero también a las contradicciones y los límites que estas acciones conllevan, pueden constituir elementos importantes en la discusión de la creación de mejores patrones de desarrollo socioeconómico.

Referencias

- Aglietta, M. (1979). *A theory of capitalist regulation*. London: New Left Books.
- Antonio, R. & Bonanno, A. (2000). A new global capitalism? From “americanism and fordism” to “americanization-globalization”. *American Studies*, 41(2-3), 33-77.
- Bartra, A. (2004). Rebellious cornfields: toward food and labor self sufficiency (pp. 18-36). En Otero, G., *Mexico in transition, neoliberal globalism, the state, and civil society*. London: Zed Books.
- Bhagwati, J. (2004). *In defense of globalization*. New York: Oxford University Press.
- Bartra, R. (1974). *Estructura agraria y clases sociales en México*. Ciudad de México: ERA.
- Berg, B. L. (2007). *Qualitative research methods for the social sciences*. Boston: Pearson.
- Biodiversity Research Institute (IRBIO) (2011). Chiapas, leading palm oil producer. Recuperado de <http://www.irbio.chiapas.gob.mx>
- Bonanno, A. (2012). The legitimation crisis of neoliberal globalization: instances from agriculture and food. Ponencia presentada en Annual Meeting of the Rural Sociological Society. Chicago, IL, del 26 al 29 de julio.
- Bonanno, A. & Barbosa, J. (2011). *Globalization and the time-space reorganization*. Bingley, UK: Emerald Publishing.
- Bonanno, A. & Constance, D. (2008). *Stories of globalization transnational corporations, resistance and the state*. University Park: Penn State University Press
- Bonanno, A., Busch, L., Friedland, W., Gouveia, L. & Mingione, E. (1994). *From Columbus to ConAgra*. Lawrence, KS.: University Press of Kansas.
- Bryant, A. & Charmaz, K. (2007). *Grounded theory*. Los Angeles: Sage.
- Busch, L. (2011). *Standards, recipes for reality*. Cambridge: MIT Press.
- Buttel, F. & Newby, H. (eds.) (1980). *Rural sociology of the advanced societies*. Montclair, NJ: Allanheld Osmun.
- Byrne, J. (ed.). (2012) *The occupy handbook*. New York: Back Bay Books.
- Calderón, F. (2008). *Segundo Informe de Gobierno*. México: Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
- Carnoy, M. (1984). *The state and political theory*. Princeton: Princeton University Press.

- Castañeda, Y., González, A. & Massieu, Y. (2011). Biocombustibles y soberanía alimentaria: una reflexión para el México del S. XXI. Ponencia presentada en el 8º Congreso Nacional de la AMER, Puebla, México.
- Cohen, S. & DeLong, B. (2010). *The end of influence: what happens when other countries have the money*. New York: Basic Books.
- Collier, G. (2008). *Basta!: land and the Zapatista rebellion in Chiapas*. Oakland, CA: Food First Books.
- Collins, C. (2012). *How wealth inequality is wrecking the world and what we can do about it*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Collins, J., Williams, B. & Di Leonardo, M. (eds.) (2008). *New landscapes of inequality: neoliberalism and the erosion of democracy in America*. Santa Fe, NM: School for Advanced Research Press.
- Cornelius, W. & Myhre, D. (1998). *The transformation of rural Mexico: reforming rural Mexico*. San Diego: Center for US-Mexican Studies, University of California San Diego.
- Crouch, C. (2011). *The strange non-death of neo-liberalism*. Malden, MA: Polity Press.
- Dumenil, G. & Levy, D. (2011). *The crisis of neoliberalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Flank, L. (2011). *Voices from the 99 percent: an oral history of the Occupy Wall Street movement*. New York: Red and Black Publishers.
- Fletes, H. (2013). *La construcción de cadenas agroindustriales de mango en Chiapas. Diversidad y contingencia en la globalización*. Guadalajara: Ediciones de la Noche, UNACH.
- Fletes, H., Macías, A. & Madera, J. (coords.) (2014). *El papel de los pequeños productores en la agricultura y alimentación. La experiencia desde tres regiones agrícolas en México*. México: Plaza y Valdés, UNACH, UdeG, UAN, Conacyt.
- Fletes, H., Rangel, F. & Ocampo, G. (2010). Límites de la agricultura comercial y retos para los pequeños productores en el nuevo dinamismo de los mercados agrícolas globales. Una experiencia desde el sur de México. Ponencia presentada en el VIII Latin American Congress of Rural Sociology, Porto de Galinhas, PE, Brasil.
- Frank, A. (1969). *Latin America and underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.
- Friedman, M. (1982) [1962]. *Capitalism and freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Galarza, E. (1964). *Merchants of labor: The Mexican bracero story*. San José, California: Rossicrucian Press.
- Gobierno de Chiapas (2009). Nota de prensa, 24 de agosto de 2009. Recuperado de <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/busquedas.php?frase=instituto+de+bioenerg%C99ticos>
- González, H. & Macías, A. (2007). Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México. *Desacatos*, 25, 47-78.
- Greenwood, D. (2011). The problem of coordination in politics: what critics of neoliberalism might draw from its advocates. *Polity*, 43(1), 36-57.
- Habermas, H. (2012). *The crisis of the European Union: a response*. Malden, MA: Polity Press.

- Habermas, H. (1975). *The legitimation crisis*. Boston: Beacon Press.
- Harvey, D. (2010). *The enigma of capital and the crisis of capitalism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (1989). *The condition of postmodernity*. Oxford: Basil Blackwell.
- Harvey, N. (1998). *The Chiapas rebellion: the struggle for land and democracy*. Durham, NC: Duke University.
- Helleiner, E. (2010). A Bretton Woods moment? The 2007-2008 crisis and the future of global finance. *International Affairs*, 86(3), 619-636.
- Hewitt, C. (1999 [1976]). *La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores.
- Hofman, A. (2000). *The economic development of Latin America in the 20th Century*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Holt-Gimenez, E. & Kenfield, I. (2009). When renewable isn't sustainable: agrofuels and the inconvenient truths behind the 2007 U.S. Energy Independence and Security Act. En Jonasse, R. (ed.), *Agrofuels in the Americas*. Oakland, CA: Food First. Institute for Food and Development Policy. Recuperado de <http://alternativeenergy.procon.org/sourcefiles/WhenRenewableIsntSustainable.pdf>
- Hudis, P. (2013). A structural crisis of capital? Reflections on the great recession. Ponencia presentada en Annual Meeting of the Midwest Sociological Association. Chicago, IL., marzo.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2007). *Censo Agrícola, Ganadero y Forestal*. Aguascalientes: INEGI.
- Jessop, B. (1982). *The capitalist state*. New York: New York University Press.
- Johnson, G. (1973). *World agriculture in disarray*. London: Macmillan.
- Jonasse, R. (2009). Introduction: Agrofuels and our endangered world. En Jonasse, R. (ed.), *Agrofuels in the Americas*. Oakland, CA: Food First. Institute for Food and Development Policy. Recuperado de <http://www.foodfirst.org/en/node/2426>
- Krippner, G. (2011). *Capitalizing on crisis: the political origins of the rise of finance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Krugman, P. (2012, November 20). We can have both growth and justice. *Houston Chronicle*, B11.
- Lapavistas, C. (2012). *Crisis in the Eurozone*. London: Verso.
- Lechuga, J. (2006). *La estructura agraria de México: un análisis de largo plazo*. Ciudad de México: UAM Azcapotzalco.
- Lipietz, A. (1987). *Mirages and miracles*. London: Verso.
- Lipietz, A. (1992). *Towards a new economic order: post-fordism, ecology, and democracy*. New York: Oxford University Press.
- López, R. (2007). *Análisis microeconómico de la producción de palma de aceite en el Valle*

- de Tulijá*. Tesis de licenciatura en economía. Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
- Lupel, A. (2005). Tasks of a global civil society: Held, Habermas and democratic legitimacy beyond the nation-state. *Globalizations*, 2(1), 117-133.
- Manrique, L. (2010). ¿Está el futuro en el etanol? *Economía Exterior*, 52, 121-130.
- Marcuse, H. (1964). *One dimensional man*. Boston: Beacon Press.
- Miccolis, A. & Teixeira de Andrade, R. (2012). The expansion of oil palm in the Brazilian Amazon: paths forward for sustainability among family farmers. Ponencia presentada en el 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California, 23-26 de mayo.
- Merrill, T. & Miró, R. (eds.) (1996). *Mexico: a country study*. Washington: GPO for the Library of Congress.
- Morton, A. D. (2011). *Revolution and state in modern Mexico: the political economy of uneven development*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Morton, A. D. (2003). Structural changes in neoliberalism in Mexico: 'passive revolution' in the global political economy. *Third World Quarterly*, 24(4), 631-653.
- Mottura, G. & Pugliese, E. (1980). Capitalism in agriculture and capitalist agriculture: the Italian case (pp. 88-106). En Buttel, F. & Newby, H. (eds.), *Rural sociology of the advanced societies*. Montclair, NJ: Allanheld Osmun.
- O'Connor, J. (1974). *The fiscal crisis of the state*. New York: St. Martin's Press.
- Offe, C. (1985). *Contradictions of the welfare state* (editado por John Keane). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Otero, G. (2004). *Mexico in transition, neoliberal globalism, the state, and civil society*. London: Zed Books.
- Otero, G. (1999). *Farewell to the peasantry. Political class formation in rural Mexico*. Boulder, CO: Westview Press.
- Overbeek, H. & Van Apeldoorn, B. (2012). *Neoliberalism in crisis*. New York: Palgrave MacMillan.
- Pechlaner, G. & Otero, G. (2010). The neoliberal food regime: neoregulation and the new division of labor in North America. *Rural Sociology*, 75(2), 179-208.
- Pineda, S. (2009). *Productores de palma de aceite del Soconusco ante el impacto del orden mundial contemporáneo*. Tesis de maestría en recursos naturales y desarrollo rural, El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
- Pollard, V. (ed.) (2012). *State capitalism, contentious politics and large-scale social change*. London: Heymarket.
- Prasad, M. (2006). *The politics of free markets: the rise of neoliberal economic policies in Britain, France, Germany and the United States*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramírez, R. (1991). *La palma africana: una alternativa para el trópico húmedo*. Folleto no. 1. Acapetahua, Chiapas, México: INIFAP.
- Ramírez, A. (1989). *Acumulación de capital y clases sociales en el campo mexicano*. Ciudad

de México: Pueblo Nuevo.

- Ramor, R. (2011). *Zapatista spring: anatomy of a rebel water project & the lessons of international solidarity*. Oakland, CA: AK Press.
- Raulet, G. (2011). Legitimacy and globalization. *Philosophy Social Criticism*, 37(3), 313-327.
- Rodefeld, R., Flora, J., Voth, D., Fujimoto, I. & Converse, J. (1978). *Change in rural America*. St. Louis: The C.V. Mosby Company.
- Sabines, J. (2011). *Anexo 2. Quinto Informe de Gobierno*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México: Gobierno del Estado de Chiapas.
- Sabines, J. (2007). *Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México: Gobierno del Estado de Chiapas.
- Stiglitz, J. (2003). *The roaring nineties*. New York: W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. (2002). *Globalization and its discontents*. New York: W.W. Norton & Company.
- Tabb, W. (2010). Financialization in the contemporary social structure of accumulation (pp. 145-167). En McDonough, T., Reich, M. & Kotz, D. (eds.), *Contemporary capitalism and its crises*. New York: Cambridge University Press.
- Underhill, G. & Zhang, X. (2008). Setting the rules: private power, political underpinnings, and legitimacy in global monetary and financial governance. *International Affairs*, 84(3), 535-554.
- Van Gelden, S. (ed.) (2011). *This changes everything: the Occupy Wall Street and the 99 % Movement*. New York: The Positive Futures Network.
- Velasco, E. (2010). *Crisis agroalimentaria. Impacto y estrategias de pequeños productores en Villa Comaltitlán, Chiapas*. Tesis de licenciatura en economía, Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
- Weller, J. (1998). *Los mercados laborales en América Latina: su evolución en el largo plazo y sus tendencias recientes*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Wolf, S. & Bonanno, A. (eds.) (2014). *The neoliberal regime in the agri-food sector: crisis, resilience and restructuring*. Milton Park, UK: Routledge.